

# Boletín Oficial

## DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 10, á 8 reales al mes para esta capital, y 10 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á real el pliego.

### PARTE OFICIAL.

#### PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

El Presidente del Consejo de Ministros al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación:

«Gijón 26 de agosto á las diez y veinte minutos de la noche.

La Reina (Q. D. G.) y su augusta Real familia continúan sin novedad en su importante salud.»

#### ARTICULO DE OFICIO.

##### GOBIERNO DE PROVINCIA.

CIRCULAR N.º 455.

Ocupado el Consejo provincial por algunos días en asuntos de despacho perentorio y urgente, tiene necesidad de suspender desde hoy la recepción de quintos, la cual se continuará en el momento en que concluya aquel servicio.

Lo que se circula por el Boletín á fin de que los Ayuntamientos no remitan los quintos á esta capital hasta que se les avise.

Orense 29 de agosto de 1858.—El Gobernador, *Hermenegildo Guítan*.

Número 456.

El Ilmo. Sr. Director general de Correos en 19 del actual me dice lo siguiente:

Por Real orden de 17 del corriente se ha servido S. M. conceder el uso de sellos oficiales, para su correspondencia de oficio, á los

Ingenieros de las divisiones de ferro-carriles, así como á los ayudantes, auxiliares y sobrestantes (en el caso de dirigirse estos á los Ingenieros sus gefes inmediatos), con estricta sujecion á lo establecido en el Real decreto de 16 de marzo de 1854.

Lo digo á V. S. para su conocimiento, y á fin de que por la Administración de Hacienda pública de esa provincia se faciliten á dichos funcionarios con las formalidades prevenidas los referidos sellos oficiales.

Lo que se inserta en este periódico oficial para conocimiento del público, y en particular de los funcionarios á quienes interese. Orense agosto 30 de 1858.—El Gobernador, *Hermenegildo Guítan*.

Número 457.

La Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado me dice con fecha 23 del actual lo que sigue:

Un comisionado de una empresa de ferro carriles ha pretendido eludir el pago del valor de expropiación de varios terrenos pertenecientes al clero, objetando que los del Estado se hallan cedidos gratuitamente á las empresas citadas.

Aunque caso único, pues las demás satisfacen cual deben el valor de los terrenos de la expresada procedencia, la Dirección está en el caso de anticiparse á salvar la duda que acaso pueda producir igual interpretación en otras provincias, y por lo tanto espera que V. S. haga entender á la Administración principal de Propiedades y Derechos del Estado en esa provincia que los bienes cedidos gratuitamente á las empresas de ferro-carriles son los de dominio público pertenecientes al Estado; pero que los del clero no tienen este carácter, pues si bien la Hacienda pública se halla incautada de ellos,

es por efecto de una ley especial, cual es la de 1.º de mayo de 1855, hoy suspendida, indemnizando al clero en renta ó venta del valor de los precitados bienes.

Por lo tanto, no deben consentir la expropiación sino en los términos prevenidos para la propiedad particular, ó sea mediando el pago del valor de los terrenos, previo expediente aprobado antes por esta Dirección general.

Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos correspondientes. Orense 30 de agosto de 1858.—El Gobernador, *Hermenegildo Guítan*.

Número 458.

La Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado con fecha 23 del corriente me dice lo siguiente:

Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección general con fecha 18 del actual la Real orden siguiente:

«Ilmo. Sr.: El Señor Ministro de Hacienda comunica con esta fecha al de Fomento la Real orden siguiente.—He dado cuenta á S. M. de la reclamación presentada por D. José Salamanca, pretendiendo que se declare que las Empresas de Ferro-carriles solo están obligadas á indemnizar á los pueblos el 80 por 100 del valor de los terrenos de Propios que utilicen, mas no el 20 por 100 correspondiente al Estado por considerarle comprendido entre los bienes de dominio público concedidos gratuitamente á la Empresa por el párrafo 1.º del art. 5.º del Real decreto de 19 de diciembre de 1851.

En su vista y de la Real orden de 21 de mayo de 1856 expedida por el Ministerio de Fomento, en la que se declaró que los bienes de Propios no eran de los comprendidos en el expresado Real decreto; y

considerando que el condominio del 20 por 100 que el Estado tiene en los bienes expresados es indivisible para que por sí solo pueda constituir terreno utilizable por el dominio público, siendo por consecuencia de igual índole que el de 80 restante; la Reina (Q. D. G.) de conformidad con la opinión emitida por la Sección de Hacienda del Consejo Real y por la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado, se ha servido desestimar lo solicitado por D. José Salamanca, declarando que no perteneciendo los bienes de Propios á la clase de los de dominio público, deben las Empresas de Ferro-carriles indemnizar el valor de los que utilicen tanto en la parte del 80 por 100, que corresponde á los pueblos, cuanto en la del 20 por 100 del Estado.

De Real orden lo digo á V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes, con inclusion de la solicitud del interesado que V. E. acompañó á la Real orden de 27 de abril del año próximo pasado.

De la propia Real orden comunicada por el referido Sr. Ministro, lo traslado á V. I. para iguales fines.»

Lo que la Dirección traslada á V. S. esperando se sirva adoptar las medidas convenientes para que en todos los expedientes que se instruyan sobre expropiación de bienes de Propios, se dé conocimiento á la Administración principal de Propiedades y Derechos del Estado para que concurre a las diligencias como representantes del condominio que el Estado tiene sobre dichos bienes, y gestione el ingreso en las Cajas del Tesoro de la parte del valor de la expropiación que á aquel corresponde.

Lo que se anuncia al público para su conocimiento. Orense 30 de agosto de 1858.—El Gobernador, *Hermenegildo Guítan*.



En la Gaceta de Madrid número 237 del miércoles 25 del actual se publica lo siguiente:

MINISTERIO DE FOMENTO.

Obras públicas.

Mmo. Sr.: S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha servido nombrar al Ingeniero Inspector de Caminos, Canales y Puertos, D. Lucio del Valle, y al Ingeniero Jefe de segunda clase, D. José Morer, para que practiquen el estudio de las aguas del río Segura, que en cumplimiento de lo mandado en Real orden de 21 del actual debe verificarse en el punto donde tienen su derivación las acequias mayores de la huerta de Murcia. De Real orden lo digo á V. I. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 de agosto de 1858.—Corvera.—Sr. Director general de Obras públicas.

CONSEJO DE ESTADO.

REAL DECRETO.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española Reina de las Españas: á todos los que las presentes vieren y entendieren, y á quienes toca su observancia y cumplimiento, sabed: que he venido en decretar lo siguiente:

En el pleito que ante mi Consejo Real pende en primera y única instancia, entre partes de la una D. José María Arruñada, vecino de Rivedeo, provincia de Oviedo, representado por el Licenciado Don Santiago Aguiar y Mella, demandante, y de la otra mi Fiscal en representación y defensa de la Administración general del Estado, demandada, sobre validez ó insubsistencia de la Real orden de 12 de agosto de 1857, por la cual se confirmó el decreto del Gobernador de Lugo declarando la nulidad del expediente de la mina Esperanza, situada en el distrito de Villadrid: Visto: Visto el expediente relativo á la expresada mina, del que resulta:

Que D. Manuel García Mon, consocio de Arruñada, presentó escrito al Alcalde de Villadrid en 22 de mayo de 1853, pidiendo que se le admitiera información sumaria acerca de los extremos siguientes, que resultaron más tarde acreditados por las declaraciones de tres testigos:

1.º Que en el sitio llamado Veneiras de Neipin, distrito de Villadrid, parroquia de Villaboa, existían unas cuevas, representando explotaciones de cobre y hierro, de antigüedad remotísima, y

2.º Que se ignoraba quién pudiese haber sido ni fuese dueño de las mismas:

Que en 19 de junio recurrieron Arruñada y Mon al Gobierno político de Lugo, acompañando á su escrito la información expresada en prueba del abandono de las excavaciones, pidiendo que se declarase su caducidad, conforme al art. 21 de la ley, y que se les admitiese el denuncio del terreno, cuya adquisición solicitaban por dos pertenencias con el nombre de Esperanza; siendo de advertir que entre los linderos del terreno pretendido designaron el de la mina Dichosa por el Norte, expresando que esta mina había sido registrada por uno de los interesados. Que el Gobernador de Lugo decretó la publicación de la anterior solicitud en el Boletín oficial y en la Gaceta de Madrid, señalando el término de 30 días para que se produjesen las reclamaciones en contrario.

Que transcurrido el expresado plazo sin que resultase oposición alguna, Arruñada y Mon presentaron nueva solicitud en 21 de junio de 1853, pidiendo la adjudicación y el título de propiedad de dos pertenencias, en cuya virtud el Gobernador, en providencia de 29 de julio, declaró la caducidad de las minas antiguas, y decretó favorablemente la instancia de adjudicación, mandando que pasase el expediente al Ingeniero:

Que constituido este funcionario sobre el terreno, evacuó su cometido, manifestando en su informe de 23 de marzo de 1856 que no había hecho la demarcación de la Esperanza, porque hallándose situada cerca del registro anterior llamado Dichosa, y lindando con otra también mas antigua, llamada Genovesa, no resultaba terreno franco para las dos pertenencias de la Esperanza; que según causa instruida en el Juzgado de Rivedeo, esta mina era la misma Dichosa, aunque aparecía en otro punto.

Y últimamente, que el Gobernador, en vista de este informe, depegó la admisión del registro Esperanza, quedando sin efecto su expediente.

Visto el nuevo informe pedido al Inspector de minas y evacuado por él en 1.º de diciembre, expresando principalmente que el registro Esperanza, distaba en efecto unos 60 metros de la Dichosa, y que únicamente cuando se conociese la designación de esta última podría decirse si había lugar á constituirse la primera con una pertenencia:

Visto el expediente instruido con ocasión de la mina Dichosa, del que resulta que en 28 de junio de 1854 fue registrada por dos pertenencias por D. Manuel María Mon y otro interesado, habiéndose decretado en 18 de julio siguiente el reconocimiento preliminar del terreno, el cual quedó sin ejecutar hasta el 23 de mayo de 1856, en que el Ingeniero evacuó su informe manifestando que había mineral, aunque por no haberle dado muestras ignoraba su igualdad con el presentado, y que había asimismo terreno franco para las dos pertenencias:

Vista la copia simple de la escritura otorgada en 30 de agosto de 1854 por D. Joaquín Fernandez, que era el interesado que registró la Dichosa con García Mon y por D. José Prieto, los cuales, refiriéndose á otro documento otorgado entre los tres interesados que van nominalmente expresados, en que constaba que la mina Dichosa era de los tres por iguales partes, vendían las dos terceras suyas á D. Antonio de las Casas, en cuyo caso solo quedaba á García Mon una tercera parte:

Visto el escrito presentado por Casas en 24 de diciembre de 1856 proponiendo la designación de las dos pertenencias de la Dichosa:

Visto el presentado ante el Ministerio de Fomento por D. José Arruñada y Don Manuel García Mon en 31 de marzo de 1857, pidiendo, entre otras cosas, que se decretase la demarcación del denunciado Esperanza, y que en todo caso se declare abandonado el registro Dichosa:

Vista la Real orden de 12 de agosto, por la cual se confirmó el decreto de caducidad de la Esperanza, teniendo en cuenta sustancialmente:

1.º Que declarada la caducidad de las cuevas, denunciadas, los interesados dejaron transcurrir el plazo del art. 103 del reglamento de Minas:

2.º Que siendo la Esperanza posterior al registro Dichosa, no puede establecerse careciendo de terreno franco, y

3.º Que el expediente Dichosa no adolece de vicio alguno, sin que pueda caducar por la renuncia de García Mon, uno de los registradores, puesto que solo le corresponde la tercera parte:

Vista la demanda presentada por el Licenciado Aguiar y Mella á nombre de Don José María Arruñada, con la solicitud de que se deje sin efecto la Real orden citada; se manifieste proceder á la demarcación de la Esperanza y se declare caducado el registro Dichosa:

Vista la contestación de mi Fiscal, pidiendo que se desestime la demanda y

que se confirme la Real orden de 12 de agosto reclamada:

Vista la ley de Minería de 11 de abril de 1849:

Vistos los artículos 51 y 58 del reglamento de 31 de julio de 1849:

Considerando que hay terreno franco para la demarcación de una mina cuando no está ocupado en parte alguna por minas anteriormente demarcadas y que no hayan sido declaradas denunciadas:

Considerando que no hallándose demarcada la mina Dichosa, pues no estaba admitido su registro, hay terreno franco para la Esperanza, aunque ocupe en todo ó en parte el solicitado por aquella:

Considerando que por la declaración de que existe terreno franco para la demarcación de una mina no se prejuzga el derecho á la preferencia para la concesión;

Oído mi Consejo Real, en sesión á que asistieron D. Francisco Martínez de la Rosa, Presidente; D. Domingo Ruiz de la Vega, D. Manuel García Gallardo, Don Juan Felipe Martínez Almagro, D. Florencio Rodríguez Vaamonde, D. Antonio Caballero, D. Cayetano Zúñiga y Linares, D. Manuel de Sierra y Moya, D. Antonio Gil de Zárate, D. Francisco Tames, D. Antonio Navarro de las Casas, D. José María Trillo, D. José Antonio Olañeta, D. Antonio Escudero, D. Fernando Alvarez, D. José de Zaragoza, Don Fermín Salcedo, D. José Caveda, el Conde de Cleonard y D. Tomas Betorillo,

Vengo en dejar sin efecto la Real orden de 12 de agosto de 1857, y en mandar que se proceda á la demarcación de la Esperanza y continuación de su expediente, sin perjuicio de que en su día se resuelva por quien corresponda el derecho á ser preferido para la concesión.

Dado en Palacio á 17 de julio de 1858.—Esta rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

Publicación.—Leído y publicado el anterior Real decreto por mí el Secretario general del Consejo de Estado, hallándose celebrando audiencia pública el Consejo pleno, acordó que se tenga como resolución final en la instancia y autos á que se refiere; que se una á los mismos; se notifique á las partes por cédula de Ujier, y se inserte en la Gaceta, de que certifico. Madrid 26 de julio de 1858.—Juan Sunyé.

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

En la villa y corte de Madrid, á 23 de agosto de 1858, en los autos de competencia suscitada entre el Juzgado de la Capitanía general de Sevilla y el de Hacienda de Cádiz sobre conocimiento de la causa instruida con motivo de la introducción fraudulenta de 120 quintales de bacalao en la última de dichas ciudades:

Resultando que apareciendo en las actuaciones iniciadas por el Juzgado de Hacienda sospechas mas ó menos fundadas de que los Oficiales del cuerpo de Carabineros, D. Juan Morales y D. Ramon Alvarez, encargados del muelle y del punto de fondeos, fuesen cómplices en el indicado delito de defraudación, ó por lo menos negligentes en el desempeño de sus respectivos deberes; se creyó dicho Juzgado competente para proceder contra dichos Oficiales, y ofició de inhibición al Juzgado de la Capitanía general de Sevilla, que también instruíra diligencia contra los mismos;

Resultando que el Juzgado de Guerra, lejos de acceder á la inhibición pretendida por el de Hacienda de Cádiz, sostuvo su competencia para conocer de la causa respecto á Morales y Alvarez, fundándose en que su procedimiento tenía por objeto averiguar si por parte de estos había existido falta de puntualidad, indolencia ó descuido, lo cual corresponde á la jurisdicción militar con arreglo á los artículos

91 y 95 del reglamento del cuerpo de Carabineros:

Resultando que la jurisdicción especial de Hacienda sostiene, por el contrario, su competencia para proceder contra los referidos Oficiales, porque siendo el delito que se les imputa de los conexos al de contrabando ó defraudación que por el artículo 17 del Real decreto de 20 de junio de 1852, en su número 6.º, se someten á los Juzgados especiales del ramo, á estos toca el conocimiento:

Vistos; siendo Ponente el Ministro Don Fernando Calderon Collantes:

Considerando que si los Oficiales procesados fueron autores ó cómplices en el delito de contrabando que principalmente dió lugar á la formación de esta causa, corresponde indudablemente el conocimiento de la misma á la jurisdicción de Hacienda, como lo reconoce el Juzgado de Guerra por ser caso en que procede el desahucio, según el mismo reglamento:

Considerando que si aun no siendo autores ni cómplices, facilitaron con su negligencia la defraudación, incurrieron en falta ó delito conexo con el principal de contrabando, y según lo establecido en el precitado Real decreto de 20 de junio de 1852 quedaron sujetos á la jurisdicción de Hacienda, á la cual compete conocer del delito principal y de todos sus conexos:

Considerando que los artículos del reglamento militar del cuerpo de Carabineros, en que se apoya el Juzgado de Guerra, solo son aplicables á los casos en que las faltas de puntualidad, indolencia ó descuido de los individuos del cuerpo les constituyen en responsabilidad, sin que produzcan delito conexo al de contrabando;

Fallamos, que debemos declarar y declaramos que el conocimiento de esta causa, en la parte que ha sido objeto de la competencia, corresponde al Juzgado de Hacienda de Cádiz, al cual se remitan todas las actuaciones para los efectos de derecho.

Así por esta nuestra sentencia, de la cual se pasarán copias certificadas para su publicación en la Gaceta de esta corte é inserción en la Colección legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ramon Lopez Vazquez.—El Sr. Gonzalez Nandín votó por escrito, Ramon Lopez Vazquez.—Fernando Calderon Collantes.—Gabriel Ceruelo de Velasco.

Publicación.—Leída y publicada fué la precedente sentencia por el ilmo. Señor Don Fernando Calderon Collantes, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, estando celebrándose audiencia pública en su Sala extraordinaria el día de hoy, de que certifico como Secretario de S. M. y Escribano de Cámara.

Madrid 23 de agosto de 1858.—Donisio Antonio de Págo.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público: Orense agosto 30 de 1858.—El Gobernador, Hermenegildo Guitián.

Número 460.

En la Gaceta número 238 del jueves 26 del actual se lee lo siguiente:

CONSEJO DE ESTADO.

REAL DECRETO.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española Reina de las Españas: á todos los que las presentes vieren y entendieren, y á quienes toca su observancia y cumplimiento, sabed: que he venido en decretar lo siguiente:

En el pleito que en mi Consejo Real pende en primera y única instancia entre partes de la una Don Martin Cabrera Ruiz, Administrador jubilado de Rentas estancadas de la provincia de Barcelona, demandante; y de la otra la



Administración general del Estado, de-  
mandada, y en su nombre mi Fiscal, so-  
bre revalidación del empleo de Contador  
de Hacienda pública de Sevilla que el pri-  
mero dice haber servido en 1845:

Visto el expediente instruido con este  
motivo en el Ministerio de Hacienda, del  
cual resulta: que por Real orden de 17  
de julio de 1852 fué rehabilitado D. José  
Luis Quiroga en el expresado destino de  
Contador de Rentas de la provincia de  
Sevilla, que obtuvo del Regente del Rei-  
no en 21 de julio de 1845, y desempeñó  
desde el 26 al 30 del mismo mes, segun  
lo acredita con la orden original de su  
nombramiento y la certificación de toma  
de posesión expedida por el Intendente  
de aquella provincia en el propio día 30;  
habiéndose después declarado á su viuda  
la pensión de 5,000 rs. correspondiente  
al citado destino:

Que D. Martín Cabrera Ruiz acudió en  
23 de mayo de 1855 solicitando se le re-  
validase el empleo de tal Contador, que  
dijo haber desempeñado desde últimos de  
junio á fin de julio de 1845 por nom-  
bramiento del Gobierno que quedó en  
Madrid á la salida del Regente del Reino,  
presentando á falta de credencial cuatro  
certificaciones de testigos estantes á la  
sazon en el cuartel general del ejército de  
operaciones de Andalucía, de las cuales  
se deduce que estuvo sirviendo el enun-  
ciado empleo en los mismos días en que  
Quiroga acredita haberlo ejercido:

Y por último, que de los informes pe-  
didos aparece que no existe acto alguno  
autorizado por Cabrera como tal funcio-  
nario, ni nómina ni matrícula en que conste  
con semejante carácter, sino únicamente  
con el de cesante de la plaza de Oficial pri-  
mero de la Administración de Madrid en  
22 de octubre de 1842, en cuya situación  
se le declaró por Real orden de 12 de no-  
viembre de 1845, á contar desde la pri-  
mera de dichas fechas en que fué pro-  
vista aquella plaza, y en este concepto  
fué clasificado en la época citada:

Vista la Real orden reclamada en 17  
de junio de 1857, por la que, conside-  
rando que Cabrera no presentaba el nom-  
bramiento de Contador de Sevilla, ni  
justificaba debidamente la toma de pose-  
sion: que en ninguna dependencia se ha-  
llaban antecedentes de su nombramiento,  
y si constaba su clasificación en noviem-  
bre de 1845 como Oficial primero de la  
Administración de esta provincia, contra  
la cual nada había opuesto el interesado  
en 11 años; y que Quiroga justificó su  
nombramiento y toma de posesión, por  
lo que fué clasificado en su día, tuvo á  
bien desestimar la rehabilitación pedida  
por D. Martín Cabrera Ruiz, quedando  
en su lugar la practicada á D. Luis José  
Quiroga:

Visto el recurso contencioso interpues-  
to por Cabrera Ruiz contra la anterior  
Real resolución, pretendiendo que se  
acuerde el reconocimiento de sus dere-  
chos adquiridos en el desempeño del re-  
ferido destino:

Vista la contestación de mi Fiscal con  
la solicitud de que se confirme en todas  
sus partes la Real orden reclamada:

Considerando que la resolución gubér-  
nativa está fundada en el resultado del  
expediente y en la justa aplicación de  
las disposiciones legales vigentes en la  
materia;

Dado mi Consejo Real, en sesión á que  
asistieron D. Francisco Martínez de la  
Rosa, Presidente; D. Domingo Ruiz de la  
Vega, D. Manuel García Gallardo, Don  
Juan Felipe Martínez Almagro, D. Satur-  
nino Calderón Collantes, D. Florencio  
Rodríguez Ysamonde, D. Antonio Caba-  
lero, D. Cayetano de Zúñiga y Linares,  
D. Manuel de Sierra y Moya, D. José Ruiz  
de Apudara, D. Antonio Gil de Zárate,  
D. Francisco Tames Hevia, D. Antonio  
Navarro de las Casas, D. José María Trillo,  
D. José Antonio Olafeta, D. Antonio Es-  
cudero, D. Pedro Egaña, D. Fernando  
Alvarez, D. Manuel Moreno Lopez, Don

José de Zaragoza, D. Fermín Salcedo,  
D. José Cayeda, el Conde de Cleonard y  
D. Tomás Retortillo,

Vengo en desestimar el recurso pro-  
puesto por D. Martín Cabrera Ruiz contra  
mi Real orden de 17 de junio de 1857,  
y en mandar se lleve esta á debido efecto  
en todas sus partes.

Dado en Palacio á 17 de julio de 1858.  
—Está rubricado de la Real mano.—El  
Ministro de la Gobernación, José de  
Posada Herrera.

Publicacion.—Leído y publicado el  
anterior Real decreto por mí el Secretario  
general del Consejo de Estado, hallándose  
celebrando audiencia pública el Consejo  
pleno, acordó que se tenga como resolu-  
cion final en la instancia y autos á que se  
refiere; que se una á los mismos; se noti-  
fique á las partes por cédula de Uger, y  
se inserte en la Gaceta. De que certifico.

Madrid 26 de julio de 1858.—Juan  
Suyé.

#### SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

En la villa y corte de Madrid, á 25 de  
agosto de 1858, en los autos de compe-  
tencia entre los Jueces de primera ins-  
tancia de Alfaro y de Tafalla sobre el co-  
nocimiento de la causa contra Antonio  
García, Manuel y Nicolás Sainz, y Fran-  
cisco, cuyo apellido se ignora, vecinos de  
la villa de Rincon de Soto, correspon-  
diente al partido de Alfaro:

Resultando que sorprendidos los refe-  
ridos procesados el día 18 de noviembre  
de 1857 haciendo leña en la dehesa de  
de San Juan y sitio titulado Hondo del  
Moral, fué conducido el primero de ellos  
ante el Alcalde de la villa de Milagro, per-  
teneciente al partido de Tafalla, que ins-  
truyó sobre esto la oportuna sumaria:

Resultando que noticioso el Juzgado de  
Alfaro de su formacion reclamó el co-  
nocimiento de ella, fundado en que el  
sitio donde tuvo lugar el hecho estaba  
dentro del titulado de las Gieras, juris-  
dicion de la villa de Rincon:

Resultando que el de Tafalla, por el  
contrario, sostiene que todo el terreno  
que comprende dicha dehesa pertenece  
á la jurisdiccion de Milagro, sobre cuyo  
particular uno y otro Juez han traído di-  
ferentes pruebas á sus respectivas actua-  
ciones:

Visto: siendo Ponente el Ministro Don  
Gabriel Ceruelo de Velasco:

Considerando que ambos Juzgados sos-  
tienen su competencia para conocer de  
la causa de que se trata, fundados en que  
el lugar en que se cometió el hecho,  
origen de ella, se halla dentro de la  
demarcacion de su respectivo distrito,  
sobre cuya cuestion no está llamado á  
decidir en los presentes autos este Supre-  
mo Tribunal:

Considerando que cuando se ignora ó  
es dudoso el lugar de la comision del  
delito, el Juez competente para conocer  
de él, con preferencia á todos los demas,  
es el del domicilio del tratado ó tratados  
como reps, y que Antonio García y con-  
sortes son vecinos de la villa de Rincon  
de Soto, perteneciente al partido judicial  
de Alfaro;

Declaramos que el conocimiento de  
esta causa corresponde al Juzgado de pri-  
mera instancia del referido partido de  
Alfaro, al que se remitan unas y otras  
actuaciones para lo que proceda conforme  
á derecho.

Y por esta nuestra sentencia, de la cual  
se pasarán copias certificadas para su  
publicacion en la Gaceta de esta corte y  
Coleccion legislativa, así lo pronuncia-  
mos, mandamos y firmamos.—Ramon  
Lopez Vazquez.—El Sr. Gonzalez Nandin  
votó por escrito. Ramon Lopez Vazquez.  
—Fernando Calderon y Collantes.—Ga-  
briel Ceruelo de Velasco.

Publicacion.—Leída y publicada fué  
la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. D.

Gabriel Ceruelo de Velasco, Ministro del  
Tribunal Supremo de Justicia, estando  
celebrando audiencia pública en la Sala ex-  
traordinaria del mismo en el día de hoy,  
de que certifico como Escribano de Cá-  
mara.

Madrid 25 de agosto de 1858.—Juan  
de Dios Rubio.

Lo que se inserta en el Boletín oficial  
para conocimiento del público. Orense 30  
de agosto de 1858.—El Gobernador,  
Hermenegildo Gutian.

Número 161.

En la Gaceta del sábado 31 de julio  
último número 212 se halla inserto lo  
siguiente.

#### SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

En la villa y corte de Madrid, á 29 de  
julio de 1858, en los autos de competen-  
cia seguidos entre el Juzgado de la Capita-  
nía general de Marina del departamen-  
to de Cadiz y el de primera instancia de  
Motril sobre el conocimiento de la causa  
contra el Ayudante de Marina D. Pedro  
Egea, por haber echado de su casa con  
palabras descompuestas al Juez de paz de  
Castel de Ferro en el acto de ser requere-  
do para el pago de cierta cantidad:

Resultando que condenado Egea en  
juicio verbal por el referido juez de paz  
al pago de 102 rs. procedentes de inquilina-  
tos, y á dejar desocupada y á disposi-  
cion de su dueño la casa que habitaba,  
ofició al Comandante de Marina para que  
hiciese cumplir su providencia:

Resultando que este, con pretexto de  
que el indicado Juez carecia de jurisdic-  
cion por hallarse procesado, dejó de cum-  
plimentar el oficio, por lo cual se consti-  
tuyó el Juez de paz en casa de Egea, acom-  
pañado del Secretario y de dos testigos  
para ejecutar su providencia:

Resultando que el mencionado Egea,  
desconociendo la autoridad del Juez de  
paz, le despidió á empujones y con pala-  
bras descompuestas, hechos que dieron  
motivo al Juez de primera instancia de  
Motril para instruir diligencias, en las que  
continuó conociendo por auto de la Au-  
diencia de Granada que dejó sin efecto el  
suyo de inhibicion:

Resultando que el Juez de primera  
instancia funda su competencia en que los  
hechos que han motivado las presentes  
actuaciones estan comprendidos en la ley  
9.ª, tit. 10, libro 12 de la Novísima Re-  
copilacion, cuyo contenido no destruye lo  
prescrito en la 7.ª, tit. 7.º, libro 6.º de  
aquel Código, y el de la Capitanía gene-  
ral de Marina, en que el Juez de paz no  
podia ejercer funciones de tal por hallar-  
se procesado, y por haberse además con-  
siderado incompetente para ejecutar sen-  
tencia:

Vistos; siendo Ponente el Ministro Don  
Sebastian Gonzalez Nandin:

Considerando que el Juez de paz de  
Castel de Ferro, al ser maltratado por el  
Ayudante de Marina D. Pedro Egea, se  
hallaba en el pleno y libre ejercicio de sus  
funciones judiciales:

Considerando que con arreglo á lo pre-  
venido en la ley 9.ª, tit. 10, lib. 12 de la  
Novísima Recopilacion produce desafuero  
el delito de desacato contra las Justicias:

Considerando que la precedente ley es  
á la que se refiere, en la que se apoya y  
cuyas prescripciones ratifica y vigoriza la  
Real orden de 8 de abril de 1831, que  
priva de su fuero, por privilegiado que  
sea, al reo del delito de desacato contra  
las Justicias:

Considerando, por último, que en tal  
sentido han sido constantemente decididas  
por este Supremo Tribunal las competen-  
cias de igual clase á la presente:

Fallamos que, debemos declarar y de-  
claremos que el conocimiento de estos

autos corresponde al Juzgado de primera  
instancia de Motril, á quien se remitan  
todas las actuaciones.

Y por la presente sentencia, de la que  
se pasarán copias certificadas para su pu-  
blicacion en la Gaceta de esta corte y  
insercion en la coleccion legislativa, así lo  
pronunciamos, mandamos y firmamos.—  
Ramon Lopez Vazquez.—Sebastian Gon-  
zalez Nandin.—Fernando Calderon y Col-  
lantes.—Gabriel Ceruelo de Velasco.

Publicacion.—Leída y publicada fué  
la sentencia que antecede por el Ilmo. Sr.  
D. Gabriel Ceruelo de Velasco, Ministro  
del Tribunal Supremo de Justicia, estando  
celebrando audiencia pública en su Sala  
extraordinaria el día de hoy, de que certi-  
fico como Escribano de Cámara habilitado.

Madrid 29 de julio de 1858. Gregorio  
C. Garcia.

En la villa y corte de Madrid, á 29 de  
julio de 1858, en los autos de competen-  
cia suscitada entre el Juzgado de primera  
instancia de Balaguer y el de la Capitanía  
general de Cataluña, sobre el conocimien-  
to de la causa formada con motivo del  
incendio ocurrido en una propiedad de Don  
José Cabecerán, vecino de Camarasa, la  
mañana del 18 de abril del corriente  
año:

Resultando que instruidas las corres-  
pondientes diligencias simultáneamente  
por dicho Juzgado y por la Guardia civil,  
en averiguacion de si el hecho referido  
constituia delito ó era efecto de la casuali-  
dad, y de quienes fueran los autores en  
el primer caso, se remitieron las segundas  
al Gobierno militar de Lérida, y por éste  
á la Capitanía general de Barcelona:

Resultando que el Juzgado de Guerra  
y el ordinario pretendieron respectivamen-  
te corresponderles el conocimiento de la  
referida causa, fundandose cada uno en  
las razones que estimó procedentes, sin  
que ninguno de ellos desistiese en vista de  
las reclamaciones del otro, por lo cual se  
formalizó la presente contienda de com-  
petencia:

Vistos; siendo Ponente el Ministro Don  
Fernando Calderon Collantes:

Considerando que la jurisdiccion ordi-  
naria es siempre la competente para cono-  
cer de toda clase de delitos, menos los que  
expresamente se hallen exceptuados por  
alguna disposicion legal:

Considerando que las contenidas en  
los bandos del Capitan general de Cata-  
luña de 30 de mayo de 1855 y 4  
de julio de 1856, aun teniendo fuerza  
legal por el estado de sitio en que aquel  
distrito está declarado, solo cometen á la  
jurisdiccion militar el conocimiento de los  
delitos iguales al de que se trata, cuando  
los delinquentes sean aprehendidos in fra-  
ganti, circunstancia indispensable que no  
concorre en el presente caso:

Considerando que si bien por el prime-  
ro de dichos bandos se reservó el Capitan  
general el conocimiento de las causas que  
tuviese por conveniente abocar á si, aun  
cuando no versasen sobre los delitos ex-  
presamente sometidos á la jurisdiccion  
militar por el mismo bando, esta reserva  
no puede tener la ilimitada extension que  
se pretende por el Juzgado de Guerra,  
sino que debe limitarse á los delitos  
contra el orden público, que la Autoridad  
se propuso proteger vigorosamente por  
medio de las indicadas disposiciones, y de  
la declaracion del estado de sitio, y no  
ampliaria á los comunes como el que aquí  
se persigue, sobre los cuales haya tomado  
conocimiento legalmente la jurisdiccion  
ordinaria:

Fallamos, que debemos declarar y de-  
claremos que el conocimiento de esta  
causa corresponde al Juez de primera ins-  
tancia de Balaguer, á quien se remitan  
ambas actuaciones.

Por esta nuestra sentencia, de la cual  
se pasarán copias certificadas para su pu-  
blicacion en la Gaceta de esta corte é in-  
sercion en la Coleccion legislativa, así lo  
pronunciamos, mandamos y firmamos.—



Ramon Lopez Vazquez.—Sebastian Gonzalez Nandin.—Fernando Calderon y Collantes.—Gabriel Ceruelo de Velasco.

Publicacion.—Leida y publicada fué la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. D. Fernando Calderon Collantes, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, estando celebrando audiencia pública en su Sala extraordinaria el día de hoy, de que certifico.

Madrid 29 de julio de 1858.—Gregorio C. García.

En la villa y corte de Madrid, á 29 de julio de 1858, en los autos de competencia entre el Juzgado de la Comandancia militar de Marina de la provincia de Villagarcía y el Juez segundo de paz de Villajuan, acerca del conocimiento del juicio verbal promovido por Francisco Duran contra Manuela Patiño sobre pago de maravedís:

Resultando que Manuela Patiño demandó en el año de 1844 á Francisco Duran ante el Comandante de Marina de la provincia de Villagarcía sobre propiedad de una casa, de cuya demanda fué absuelto el Duran por sentencia de 18 de marzo de 1856, de que interpuso apelacion la demandante, que le fué admitida, quedando en tal estado los autos:

Resultando que convenidos ambos interesados por medio de un contrato que firmaron en 2 de setiembre de 1857, en la forma en que habia de dividirse la citada casa, se obligó la Patiño á pagar el coste, calculado en 150 rs., y que no habiéndolo efectuado por completo fué citada á juicio verbal ante el Juez de paz de Villajuan:

Resultando que antes de que se verificase el acto, el Juzgado de Marina de Villagarcía, á instancia de la Patiño, requirió de inhibicion al expresado Juez de paz en atencion á que en aquel Juzgado habia pleito pendiente entre las mismas partes y acerca de la misma cosa, objeto del juicio:

Resultando que resistida la inhibicion por el Juez de paz, insistió en ella el de Marina, con cuyo motivo ambos Juzgados han remitido las actuaciones para la decision de la competencia:

Vistos; siendo Ponente el Ministro Don Gabriel Ceruelo de Velasco.

Considerando que admitida en ambos efectos por el Juzgado de Marina de Villagarcía la apelacion que Manuela Patiño interpuso de la sentencia dictada en el pleito que en él se seguia, concluyó su jurisdiccion para conocer del referido litigio y de sus incidencias, interin no se resolviese aquel recurso, y que carecia por consiguiente de ella para promover la presente competencia;

La declaramos mal formada, y en su consecuencia que no há lugar á decidirla, mandando que se devuelvan las respectivas actuaciones á los Jueces que las han remitido, para lo que proceda con arreglo á derecho. Y encargamos á D. Juan Bergara, Asesor de la Comandancia de Marina de Villagarcía, que en adelante, concluida la jurisdiccion del Juzgado, se abstenga de intentar reclamaciones como la decretada.

Y por esta nuestra sentencia, de la cual se pasarán copias certificadas para su publicacion en la Gaceta de esta corte é insercion en la Coleccion legislativa, así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ramon Lopez Vazquez.—Sebastian Gonzalez Nandin.—Fernando Calderon y Collantes.—Gabriel Ceruelo de Velasco.

Publicacion.—Leida y publicada fué la sentencia que antecede por el Ilmo. Señor Don Gabriel Ceruelo de Velasco, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, estando celebrando audiencia pública en su Sala extraordinaria el día de hoy, de que certifico como Escribano de Cámara habilitado.

Madrid 29 de julio de 1858.—Gregorio C. García.

En la villa y corte de Madrid, á 29 de julio de 1858, en los autos de competencia entre la Alcaldía mayor primera de la ciudad de la Habana y el Juzgado de primera instancia de Santa Cruz de las Palmas, sobre el conocimiento de la demanda interpuesta ante el último por D. Pedro Capote García y consortes, por la cual pretenden reivindicar ciertas fincas que, comprendidas en los bienes que D. José Vicente Capote cedió á sus acreedores, las adquirió por título de compra D. Vicente Martín Gonzalez:

Resultando que en la relacion de bienes formada por el D. José Vicente, al hacer la cesion en favor de sus acreedores, comprendió las fincas que son objeto de la demanda, y que á virtud de mandato judicial se otorgó escritura de venta de estas por el representante del concurso á favor de D. Vicente Martín Gonzalez, por haber este convenido con Capote su compra y aun entregado 3.950 pesos de los 4.000 en que se fijó el precio:

Resultando que consumada la cuenta de dichas fincas, satisfechos los derechos á la Hacienda pública y tomada posesion judicial por el comprador, se presentó la demanda referida por el D. Pedro Capote García y consortes ante el Juez de primera instancia de Santa Cruz de las Palmas en 19 de octubre de 1854, y se hubo por admitida y confirió traslado de ella al demandado en 25 de los mismos mes y año:

Resultando que por este se opuso en forma de artículo de no contestar la excepcion de incompetencia de jurisdiccion, fundándose en que, habiendo pertenecido los bienes litigiosos al concurso ya indicado, de quien los adquirió, debia considerarse la demanda como un incidente del juicio universal de concurso, y que al Juez que entendia en éste correspondia exclusivamente conocer de aquel:

Resultando que desestimado el artículo é interpuesta apelacion por Martín Gonzalez, se confirmó el auto del Juez de primera instancia por la Real Audiencia de Canarias, despues de lo cual acudió el demandado á la Alcaldía mayor de la Habana donde radicaba el concurso, pidiendo se oficiase de inhibicion al referido Juez de Santa Cruz de las Palmas por las razones ya expuestas:

Resultando que así estimado, y no habiendo accedido el último á la inhibicion solicitada, se formó esta competencia entre ambos Juzgados.

Vistos: siendo Ponente el Ministro Don Fernando Calderon Collantes:

Considerando que esta competencia debe decidirse con arreglo á la legislacion antigua, porque la demanda se propuso antes de promulgarse la nueva ley de Enjuiciamiento civil:

Considerando que si bien la escritura de venta de los bienes en cuestion se otorgó por el representante del concurso á favor de Martín Gonzalez, fué porque éste los habia comprado y aun pagado en su mayor parte á D. José Vicente Capote antes de que hiciese la cesion á sus acreedores, por lo cual no entraron ni pudieron entrar legalmente en el concurso, ni considerarse hoy como incidente de este la demanda de que se trata contra un tercer poseedor:

Considerando que las acciones reales, cual es la que ejercitan García y consortes, pueden proponerse ante el Juez del distrito en que radican los bienes que son objeto de aquellas, ya se consulte la antigua legislacion, ya la ley de Enjuiciamiento civil moderna, y que en el presente caso los bienes demandados están sitos dentro de la demarcacion del Juzgado de Santa Cruz de las Palmas, ante quien se demandaron:

Considerando que, una vez propuesta la declinatoria por el demandado en forma de artículo y desestimada por las providencias conformes del Juez de dicho partido y de la Real Audiencia de Canarias sin que se promoviese ulterior instancia, quedó ejecutoriada la competencia de aquel; Fallamos, que debemos declarar y de-

claramos que el conocimiento de estos autos corresponde al Juzgado de primera instancia de Sta. Cruz de las Palmas, á quien se remitan todas las actuaciones.

Y por esta nuestra sentencia, de la cual se pasarán copias certificadas para su publicacion en la Gaceta de esta corte é insercion en la Coleccion legislativa, así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ramon Lopez Vazquez.—Sebastian Gonzalez Nandin.—Fernando Calderon y Collantes.—Gabriel Ceruelo de Velasco.

Publicacion.—Leida y publicada fué la sentencia que precede por el Ilmo. Señor D. Fernando Calderon y Collantes, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, estando celebrando audiencia pública la Sala extraordinaria el día de hoy, de que certifico como Escribano de Cámara habilitado.

Madrid 29 de julio de 1858.—Luis Calatraveño.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 30 de agosto de 1858.—El Gobernador, Herenegildo Guilian.

#### Ayuntamiento de Muñíos.

Deseando esta corporacion obtener un perfecto padron de la riqueza inmueble, cultivo y ganaderia del municipio acordó que todos los terratenientes tanto vecinos como forasteros presenten en la secretaria del Ayuntamiento dentro del improrrogable término de veinte dias, contados desde la insercion de este anuncio en el Boletín oficial de la provincia, las relaciones juradas que previenen los artículos 20, 21, 22 y 23 del Real decreto de 25 mayo de 1845, bajo las penas que establece el 24 del mismo que se harán efectivas sin consideracion de ningun género. Muñíos 20 de agosto de 1858.—El Alcalde Presidente, Domingo Fernandez.—P. A. D. A., Rosendo Blanco, secretario.

#### Juzgado de 1.ª instancia de la Coruña.

Don Remigio Salomon, socio de número de la sociedad económica de amigos del pais de Valencia, académico correspondiente de la Real academia de la historia y de la española de arqueologia, caballero de la Real orden americana de Isabel la Católica por accion de guerra, secretario honorario de S. M., juez de hacienda de la provincia y de primera instancia del partido á que da nombre esta capital.—Al Sr. Gobernador civil de la provincia de Orense y demas autoridades de la misma, sirvanse saber: que me hallo instruyendo causa sobre la fuga que en la mañana del 19 del corriente ha verificado del presidio de esta plaza, el confinado Cipriano Perez Vilasó, cuyas señas se marcan á continuacion. Por tanto de parte de S. M. la Reina (Q. D. G.), en cuyo Real nombre administro justicia, exorto, y de la mia ruego á las espresadas autoridades se sirvan disponer que por todos los medios posibles, se averigüe el paradero de dicho fugado, procediendo á su captura y remision con la seguridad necesaria á disposicion de este juzgado. Dado en la Coruña á 22 de agosto de 1858.—Remigio Salomon.—Por mandado de S. S., Manuel de la Rosa.

#### Señas del confinado Cipriano Perez Vilasó.

Es hijo de Antonio y Josefa, natural de Posdamarcos, partido de Noya, provincia de la Coruña, averindado en Boiro, su estado casado, oficio cantero, edad 30 años.

#### Señas generales.

Pelo negro, cejas idem, ojos castaños, nariz ancha, barba poca, color trigueno, cara delgada, estatura 4 pies 11 pulgadas y 6 lineas.

#### Juzga lo 1.º de paz de Irijo.

Don Benito Crespo, juez de paz primero del distrito de Irijo.—Hago saber: que por mi autoridad y por la secretaria del juzgado, se siguen autos de apremio á instancia de Julian Surribas, vecino de Puerto-Pereiras, distrito de Boborás, contra Manuel Nogueira y Ana Lopez, de Reádegos en esta de Irijo, sobre cobro, en los cuales por auto de 20 del que rije he mandado sacar á pública subasta los bienes siguientes:

La heredad Do Codesal, compuesta de labradío y monte con algunos robles de poco valor, y cuatro pies de castaños, semiente 5 ferrados y 18 cuartillos, valor líquido 160 rs.; linda José Pardo y Ribazo.

La heredad de junto á la casa con cuatro manzanos y un cerezal, sembradura 9 cuartillos, valor líquido 160 rs.; linda con casa de los mismos.

El prado de Ferradás, sembradura 15 cuartillos; linda Doña Maria Romero y otros, valor líquido 220 rs.

Cuyos bienes se hallan sitos en la parroquia de Reádegos.

En cuya virtud por el presente llamo y cito á las personas que quieran hacer postura á dichos bienes, para que en el término de veinte dias lo verifiquen ante mi autoridad, y que será admitida cubriendo las dos terceras partes de la tasacion verificada para la venta; cuyo remate está señalado para el día 14 del entrante setiembre y hora de dos de su tarde en el local donde tiene audiencia este juzgado.

Dado en Irijo á 20 de agosto de 1858.—Benito Crespo.—Joaquin Beltran, secretario.

#### Idem 2.º de la Rua.

Don Perfecto Casanova, secretario del segundo juzgado de paz de la Rua.—Certifico: que en el segundo juzgado de paz de este distrito se celebró juicio verbal á instancia de José Gomez contra don Félix Nuñez, sobre pago de 76 rs. que el José dió en préstamo al Félix, y en cuyo juicio tramitado en rebeldía del demandado, recayó la sentencia que á la letra dice:

En el juicio verbal intentado entre partes José Gomez y D. Félix Nuñez, vecinos de Fontey, en rebeldía de éste, sobre reclamacion de 76 rs. procedentes de empréstito: vista la citacion, en la cual se dá por notificado del decreto ordenando esta comparecencia el demandado; vista la demanda, y atendido á que por falta de presentacion del demandado, no ha puesto escepcion alguna á aquella.

El Sr. D. José Maria de Campo, juez 2.º de paz de este pueblo, falla: que debe condenar y condena en rebeldía á don Félix Nuñez al pago de los 76 rs. que se le han demandado y en las costas, por los que se harán pagos, previas las formalidades que corresponden, reservándole ser oído segun lo que disponen los artículos 1,182 y 1,183 de la ley de enjuiciamiento civil; notifiquese como corresponde y espídase por el secretario la conducente copia al Sr. Gobernador civil de la provincia, para que á tenor de lo que dispone el artículo 1,190 de la dicha ley se sirva disponer la insercion en el Boletín oficial. Y por esta sentencia definitivamente juzgando, así lo mandó y firma en su audiencia de la Rua á 26 de agosto de 1858, y de ello yo el secretario certifico.—José Maria de Campo.—Perfecto Casanova, secretario.—Así resulta de su original; y en cumplimiento de lo que en la providencia inserta se previene, expido la presente para su publicacion en el periódico oficial de la provincia, visada por el Sr. Juez, en la Rua dia mes y año referidos.—V.º B.º—José Maria de Campo.—Perfecto Casanova, secretario.